

La ciudad, Cárdenas y el futuro
Jueves, 11 Junio 1998
Lorenzo Meyer

El efecto multiplicador

No sólo en economía funciona el efecto multiplicador, también en política. Hay circunstancias donde el éxito o el fracaso de una acción específica tiene reverberaciones mucho más allá de su espacio propio y su efecto se transmite al resto del sistema. Ese es hoy el caso de los efectos del cambio de gobierno que tuvo lugar hace seis meses en la capital de la República. El éxito o fracaso de la primera administración electa por los capitalinos -y que puso la responsabilidad del gobierno de lo que antes fue un coto exclusivo del Presidente en manos de un partido de oposición- va a influir en los procesos políticos que ya están en marcha y que van a tener su desenlace en el año 2000. En esa fecha ya cercana, no sólo se va a decidir el control de la Presidencia de la República y del Congreso -posiciones, ambas, muy importantes-, sino la naturaleza misma de la transición política mexicana iniciada hace 30 años.

Como se sabe, en el Distrito Federal están en juego una buena parte de las posibilidades de la oposición de centro-izquierda -la representada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD)- como alternativa nacional al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y también al Partido Acción Nacional (PAN). Este último, desde 1989, pudo y decidió asumir la responsabilidad de empezar a gobernar la periferia como preparación para el asalto al centro en el año 2000. El PRD, que desde su nacimiento siguió la ruta del choque abierto con el presidencialismo, debió esperar hasta el año pasado antes de lograr la acumulación de fuerza que le permitiera ganar el control de su primer gobierno local de importancia. Y resulta que ese gobierno fue, ni más ni menos, que el de la entidad más importante, compleja y difícil de gobernar del país: el muy poblado Distrito Federal. El resultado que finalmente entregue el PRD en sólo un par de años como administrador de la capital del país va a ser determinante para que la ciudadanía juzgue su capacidad para asumir el control político de un país cuyos problemas crecen de manera exponencial. Y ese juicio de la ciudadanía ya empezó.

La primera evaluación

A finales de mayo, en vísperas de cumplirse los seis primeros meses del gobierno del ingeniero Cárdenas en el Distrito Federal, el periódico Reforma (3 de junio) llevó a cabo una encuesta entre una muestra representativa de capitalinos mayores de 18 años y el resultado no fue bueno para Cárdenas y su equipo: únicamente el 21 por ciento de los encuestados consideró que el nuevo gobierno estaba teniendo entre algo y mucho éxito en resolver los problemas más graves de la capital -para más de la mitad de quienes respondieron, ese problema es la inseguridad pública-, el 31 por ciento consideró que los éxitos eran pocos y un 44 por ciento de plano opinó que el éxito era nulo.

Lo que está en juego

Idealmente, el éxito definitivo de la prolongada transición mexicana consistiría en lograr una alternancia en el poder al más alto nivel por la vía de las urnas. Entonces y sólo entonces, quedaría claro que el histórico autoritarismo de una dictadura personal (Porfirio Díaz) o de partido (el del PRI), estaba superado. La alternativa a ese desenlace óptimo sería la permanencia del PRI en el poder por otro sexenio pero en el marco de un pluripartidismo equilibrado, es decir, de un reparto del voto en, por lo menos, tres grandes bloques que permitieran arraigar la división de poderes y poner fin al presidencialismo irresponsable que por tanto tiempo y a tan alto costo ha caracterizado a México.

Mientras las reglas del juego electoral fueron dictadas e interpretadas por el propio gobierno, no hubo posibilidad alguna de que surgiera un pluralismo efectivo. Sin embargo, el Instituto Federal Electoral (IFE) que va a organizar y vigilar el proceso del 2000, ya no es el que crearon Carlos Salinas y Emilio Chuayffet, sino uno muy distinto, que posiblemente ya está en capacidad de garantizar, por primera vez, elecciones competidas, en condiciones de relativa equidad y con resultados que se apeguen a lo que realmente dijeron las urnas. Los prerequisites para la alternancia o, al menos, el balance de las fuerzas, están casi dados. A partir de ahora, la responsabilidad mayor de la evolución política del país está en el comportamiento electoral de los partidos y en la capacidad de la oposición para asumir la responsabilidad de gobernar y mostrar que la vida cívica democrática puede ser de mayor calidad que la del presente y del pasado.

Escenarios

Los escenarios políticos inmediatos pueden ser varios, pero de entrada hay que descartar uno: lograr la transición a la democracia por la vía de la formación de un gran frente común de la oposición para desalojar del poder al partido de los 70 años de poder ininterrumpido. Si esa posibilidad fue siempre lejana, hoy no existe. El golfo que separa a los partidos de oposición entre sí es tan o más grande que el que separa a cada uno de ellos del partido del gobierno. El camino alternativo para cada una de las oposiciones es lograr por sí sola el triunfo sobre la desprestigiada y disfuncional pero aún poderosa maquinaria del PRI.

Si las elecciones para diputados de 1997 son un buen indicador de lo que podrá ocurrir cuando termine el siglo, el triunfo del PAN o del PRD sobre el PRI no es imposible aunque sí extremadamente difícil.

Como se recordará, el año pasado el PRI logró, con apoyo del "voto verde" del sur, el 39.96 por ciento del voto total. Para triunfar por sí sólo el PAN -que obtuvo entonces el 27.23 por ciento del voto- o el PRD -que consiguió el 26.27 por ciento- tendrían que hacer un esfuerzo enorme para subir su porcentaje a costa de disminuir el del PRI o al de la otra oposición. Bien manejado por la oposición, el escándalo que ya es el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), podría repercutir negativamente en la votación del PRI, sobre todo en el centro y norte del país. Por otro lado, una caída importante del voto en favor de uno de los dos partidos de la oposición también contribuiría a hacer realidad el que por sí solo un partido distinto del PRI alcanzara el poder.

El problema

Del PRI el electorado ya sabe que esperar, siete decenios de historia hacen muy predecible su comportamiento. El electorado no cautivo, el que realmente tiene posibilidades de emitir su voto en función de una evaluación de las ofertas, también ya cuenta con el registro de 10 años de administraciones panistas en el centro y norte del país, de Baja California a Querétaro. Lo que es realmente nuevo, y despertó expectativas importantes en un segmento de ese electorado al que no se le gana por la vía de máquinas de coser o bicicletas, al estilo Yucatán, es el gobierno de la capital de la República encabezado por el candidato natural del PRD a la Presidencia en el año 2000. Si esas expectativas se ven defraudadas de manera evidente, entonces queda abierta la puerta para el predominio de un bipartidismo PRI-PAN, que si bien tiene de todas maneras la posibilidad de llevar a la alternancia, en caso de que el panismo lograra hacerse de la Presidencia, a la larga significaría una simplificación excesiva de las opciones políticas de México.

El retorno del PRD a un lejano tercer lugar, le daría a la vida pública del país un tono predominantemente de derecha, lo que no sería la mejor salida para la modernización política, pues no reflejaría bien la complejidad social. En un país con la gran proporción de pobres y de marginados que tiene México, el dominio de la derecha en las urnas tendría varias consecuencias. Entre otras, haría más atractiva la acción política no electoral para algunos militantes de izquierda.

¿Qué hacer?

A mediados de 1998, y para los capitalinos, el problema público más importante según la encuesta de Reforma era la falta de seguridad pública -54 por ciento- seguido muy de lejos por el de la corrupción -14 por ciento- y por el de la contaminación, -9 por ciento-. El desempleo -una de las causas estructurales de la inseguridad- sólo resultó prioritario para el 6 por ciento. Desde la perspectiva del capitalino, lo que su gobierno debe resolver ahora es lo urgente, no lo importante.

Para cualquiera es evidente que la inseguridad y la corrupción van de la mano y que ambos problemas tiene una raíz muy añeja, que arranca, por lo menos, de la descomposición gubernamental que trajo consigo la independencia y los desordenes políticos del siglo XIX.

Sin embargo, es cierto que en el siglo actual hubo épocas en que el problema logró acotarse a ciertas zonas de la ciudad y que afectó a ciertas clase sociales -a los más pobres- más que a otras.

Desafortunadamente, de los años ochenta a la fecha, la criminalidad organizada se disparó, y sus acciones afectaron a todo el espectro social. Para el inicio de los noventa, el gobierno había perdido el control de la policía y del aparato de justicia.

Pedir al gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas que con la misma policía mal pagada, mal preparada, desmoralizada y corrupta de arriba a abajo y hasta la médula, resuelva en unos cuantos meses un problema mayúsculo que se incubó durante decenios, es pedir un imposible.

Simplemente no hay policía profesional mexicano al que no se le pueda, si se le busca, encontrar esqueletos en sus clósets. La nueva administración tiene que trabajar con un material humano echado a perder por sexenios de corrupción e irresponsabilidad institucionales. Y exactamente lo mismo se puede decir del Ministerio Público, de los reclusorios, etcétera. Sin embargo, al pedir el voto en el '97, el perredismo capitalino se comprometió a atacar el problema sabiendo la magnitud del mismo y prometió hacer retroceder la avalancha de inseguridad y delitos que hacen de la vida cotidiana un vía crucis.

El primer ministro francés, Lionel Jospin -representante del centro-izquierda europeo-, lleva un año en su puesto y no sólo mantiene su credibilidad sino que la ha aumentado justamente porque el grueso de los franceses tienen la impresión de que "hace lo que dice y dice lo que hace". En una encuesta reciente, el 70 por ciento de quienes respondieron considera que su primer ministro está preocupado por el interés general y el 75 por ciento considera que tiene la capacidad de hacerse respetar. (El País, 6 de junio).

Es indispensable que en México el jefe del Gobierno capitalino y su grupo logren hacer sentir al ciudadano común y corriente que, aunque en condiciones mucho más difíciles que en Francia, el gobierno local también entiende y hace suyos los problemas del ciudadano medio, y que efectivamente tiene la capacidad de hacerse respetar para que el aparato burocrático heredado haga lo que se dijo que se haría.

Los medios de comunicación se han volcado en críticas a la administración perredista, han magnificado errores y minimizado aciertos. Era de esperarse; después de todo, el viejo régimen aún no ha muerto. Sin embargo, el perredismo debe diseñar una estrategia de comunicación para llegar directamente al ciudadano y demostrar que el arribo de la oposición al poder significa no un mero cambio de personas sino una ruptura significativa con el pasado. El nuevo gobierno debe salir de sus oficinas y encontrarse con el ciudadano, penetrar con él en los cuarteles de policía y hacer saber a los supuestos "guardianes de la ley" que hay un costo a pagar si siguen extorsionando como antes; debe de estar al lado del ciudadano en ese castillo del horror que son los ministerios públicos, etcétera.

El 28 de mayo, el jefe del Gobierno capitalino declaró: "me jugaré el todo por el todo por la seguridad en el D.F.". Estupenda decisión, pero entiendo que ese "todo por el todo" es más que el destino político de un líder o de un partido, que hoy implica incidir en la naturaleza misma de la transición mexicana, modificar la historia.

El ciudadano de la capital no espera milagros de sus gobernantes. Sabe que los males que enfrenta son la hechura de años de autoritarismo y corrupción, pero sí espera de ellos una actitud de solidaridad auténtica, una ética opuesta a la que prevaleció cuando el presidencialismo ordenaba lo que debía ser la vida pública ciudadana. En suma, espera que se haga patente el cambio en la naturaleza de la relación entre mandantes y mandatario, y hacer del presente el inicio de lo que puede ser el futuro si, a fuerza de votos y movilizaciones, la democracia entra en "Los Pinos".